



## Poder Judicial de la Nación

**LEGAJO DE APELACIÓN DE F.B. EN AUTOS: “B.F. POR INFRACCIÓN ARTÍCULO 303 C.P.”.** CPE 2467/2016/5/CA3. Orden N° 34.536. Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6, Secretaría N° 11. Sala “A”.

Buenos Aires, de febrero de 2025.

### VISTOS:

El recurso de apelación interpuesto por F.B. junto con su defensa, contra la resolución por la cual se dictó el auto de procesamiento, sin prisión preventiva, respecto del nombrado, y por la que se ordenó trabar embargo sobre los bienes de aquél por la suma de \$ 734.000.000.

El memorial por el cual la defensa de F.B. informó en la oportunidad prevista por el art. 454 del C.P.P.N.

### Y CONSIDERANDO:

1º) Que, por la resolución recurrida, se dictó el auto de procesamiento de F.B. por considerarlo “*coautor penalmente responsable (art. 45 del Código Penal) del delito previsto por el artículo 303 incs. 1º y 2º ‘a’ primera parte del Código Penal relativo a los hechos por los cuales fuera indagado...*”, por “*...haber puesto dinero en circulación en el mercado financiero, mediante diversas operaciones bancarias y bursátiles, que no provendrían de una actividad económica lícita, sino que serían probablemente producto de la compra de bonos en pesos que realizaba, que luego los liquidaba en dólares en el sistema bursátil y una vez obtenidos los billetes estadounidenses los habría vendido en el mercado ilegal para volver a comprar nuevos títulos valores. Se presume que de esa forma habría obtenido ilícitamente rendimientos extraordinarios que reinvertía nuevamente en la compra en pesos de títulos con cotización en dólares. Así, cabe atribuir a F.B. el haber puesto en circulación en el mercado, bienes de procedencia presuntamente ilícita, con el propósito que su origen adquiriera apariencia de licitud, mediante diversas operaciones, durante*



los años 2014 y 2015 por la suma de \$183.362.886,65, sin existir constancias que justifiquen el origen del dinero...” (confr. punto dispositivo I de aquella decisión, y el considerando 1° de la misma).

Además, por la resolución impugnada se dispuso trabar embargo sobre los bienes del imputado por la suma de \$ 734.000.000 (confr. punto dispositivo II).

2°) Que, en sustento del auto de procesamiento de mención, el juzgado de la instancia previa consideró que existirían elementos de convicción suficientes para estimar acreditado, en lo sustancial, que “...La mencionada maniobra se habría llevado a cabo a partir de diversas compras y ventas de bonos, en principio “BODEN 2015”, “BONAR X” y “BONAR 2024”. Estas compras de bonos fueron realizadas con fondos depositados o transferidos por B. en sus cuentas bancarias o comitentes, cuya procedencia se estima de origen presuntamente ilícito por haber sido vendidos, en principio y según lo que puede inferirse de las constancias reunidas en autos, en el mercado informal.

En consecuencia, B. adquirió bonos pagados en pesos con fondos que no pudo justificar, para venderlos (generalmente a las 72 horas), percibiendo liquidaciones en dólares estadounidenses.

Luego, el imputado volvía a comprar bonos en pesos con fondos que provendrían de la venta marginal de los dólares generados por las liquidaciones de los bonos percibidas por éste, infringiendo de esa forma el Régimen Penal Cambiario (Ley N° 19.359).

Es decir que, en concreto y conforme las constancias recabadas por la PROCELAC, la mayor parte de las liquidaciones en dólares efectuadas por B. comenzaron a partir del año 2014, siendo el total liquidado desde ese año y hasta el 2015 de U\$S14.984.530,96, ese monto cotizado en el mercado oficial de la época representa un total de \$125.623.980,60 y en el mercado paralelo de ese momento la suma alcanza un total de \$189.135.853,10 pesos argentinos, habiendo comprado el nombrado valores en el mercado bursátil por un monto de \$183.362.886,65.

Así entonces, aquella aproximación entre el monto en pesos utilizado por B. para la compra de títulos y el monto al que se arriba por la cotización de los dólares liquidados al valor del cambio paralelo del momento, sumado a que la cifra que se obtiene por el cambio de esos mismos dólares en el mercado oficial no es suficiente para cubrir los pesos introducidos por B. en el mercado bursátil y a que el Banco Central de la





## Poder Judicial de la Nación

*República Argentina informó que no se registra por parte de B. la venta de dólares a su nombre durante el período en trato en el mercado oficial de divisas, son todos elementos indicativos de que el imputado habría acudido al mercado informal para vender los dólares que obtenía por la liquidación de los títulos valores que adquiría, en clara infracción al Régimen Penal Cambiario (Ley N° 19.359), para luego recolocarlos en el mercado.*

*En efecto, a través del circuito descripto, el imputado habría puesto en circulación en el mercado las sumas que obtendría por la venta marginal de los dólares percibidos por la liquidación de los títulos valores que previamente adquiría (generándose de esa manera una ganancia extra a si hubiese vendido esas mismas divisas en el mercado oficial).*

*Así, al reinvertir esos montos en el Mercado Bursátil, en la compra de nuevos valores cotizables en dólares, dotaba a esas ganancias ilegales de aparente licitud, para luego realizar nuevamente la misma operatoria.*

*Está claro que la operatoria desplegada resultó idónea a los fines de otorgar a esos montos espurios apariencia de licitud, toda vez que –conforme el análisis efectuado por la PROCELAC— la misma se habría llevado a cabo en forma reiterada y constante durante los años 2014 y 2015, y habría posibilitado a B. introducir en el mercado financiero un monto total de \$183.362.886,65...”.*

3º) Que, de los agravios invocados por la parte recurrente, corresponde tratar en primer lugar aquéllos vinculados con la arbitrariedad que se le atribuye a la resolución impugnada, ya que la admisión eventual de aquellos agravios y la descalificación consecuente del pronunciamiento recurrido como acto jurisdiccional válido, tornaría innecesario examinar los restantes cuestionamientos relacionados con el fondo de la decisión apelada.

4º) Que, por el recurso de apelación en examen la parte recurrente se agravio de la resolución impugnada por considerar que la “...conclusión sobre la existencia del lavado...” a la que por aquélla se arribó “...aparece reñida con las premisas y con la lógica que pretende imponerle, y es allí donde advierto cómo el silogismo del fallo pierde el rumbo y se revela como infundado, violando la manda procesal sobre la exigencia de que la expresión de la motivación sea fundada (arts.123 CPPN), y además, que respete la lógica, esto es: si analizamos un hecho que podría enmarcarse en el lavado de activos, definitivamente no podemos



*partir de una premisa inicial con activos legítimos o blancos... Por todo ello estimo arbitrario y prematuro el auto de procesamiento, pues parte de una premisa errónea (la inversión inicial era lícita) y una proyección matemática errónea (a partir de la proyección del monto del dólar en el mercado paralelo), sin que ello haya pasado de ser una hipótesis que bien pudo ventilarse con seriedad en una pericia contable... ”.*

Al respecto, sin perjuicio de lo que se desarrollará *infra* por la presente en orden a la cuestión de fondo, corresponde expresar, en primer lugar, que los jueces no están obligados, en la etapa de instrucción, a referirse a todos y a cada uno de los elementos de prueba incorporados al legajo, ni a tratar todos los argumentos ofrecidos como descargo por los imputados, ni a disponer la producción de todas las medidas de prueba solicitadas por aquéllos, sino sólo las que se estimen pertinentes a fin de comprobar si existe un hecho delictuoso mediante las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad (confr. Regs. Nos. 633/01, 981/01, 598/04, 813/10 y 63/12, entre otros, de la Sala “B” de esta Cámara y CPE 943/2010/25/CA5, res. del 01/07/2020, Reg. Interno N° 177/20 y CPE 1208/2022/30/CA7, res. del 18/10/2023, Reg. Interno N° 477/23, de esta Sala “A”), lo que es conteste con el período estrictamente preparatorio en el cual se encuentra el proceso que se lleva a cabo en la causa principal.

5º) Que, por lo demás, corresponde expresar que el postulado rector en lo que hace al sistema de las nulidades es el de la conservación de los actos y que la interpretación de la existencia de aquéllas es restrictiva (confr. art. 2º del C.P.P.N.), y sólo procede la declaración de la nulidad cuando por la violación de las formalidades resulta un perjuicio real, actual y concreto para la parte que la invoca, y no cuando se plantea en el único interés de la ley o para satisfacer formalidades desprovistas de aquel efecto perjudicial (confr. CPE 1561/2018/67/89/CA38, res. del 30/08/19, Reg. Interno N° 601/19 y CPE 1016/2017/20, res. del 16/3/2022, Reg. Int. 114/2022, de esta Sala “A” y Regs. Nos. 367/00, 764/04, 25/08, 71/10, 378/12 y FSM 20097/2015/6/CA1, res. del 14/11/2016, Reg. Interno N° 681/16, de la Sala “B” de esta Cámara).

Asimismo, para que la nulidad de una resolución se produzca por causa de vicios en la fundamentación, aquélla debe contener omisiones sustanciales de motivación; o resultar contradictoria, o arbitraria por apartamiento de las reglas de la sana crítica, de la lógica, de la experiencia o del sentido común; o estar basada en apreciaciones meramente dogmáticas.





## Poder Judicial de la Nación

Contrariamente a lo afirmado por la defensa de F.B., estos defectos no se advierten en la resolución recurrida, que ofrece una motivación suficiente sobre lo decidido sea que se la comparta, o no.

6º) Que, además, sin perjuicio de la exigencia genérica de fundamentación de los autos que se dispone por el art. 123 del C.P.P.N., por el art. 308 del mismo cuerpo legal se establecen, específicamente, las formas que deben observarse para la validez de un auto de procesamiento (confr. Reg. Nos. 379/11, 63/12, 712/13 y CPE 1353/2017/3/CA1, res. del 22/05/19, Reg. Interno N° 351/19, entre varios otros, de la Sala “B” de esta Cámara, y CFP 9881/2016/71/CA27, res. del 18/03/20, Reg. Interno N° 102/20 de esta Sala “A”).

Por lo tanto, es útil poner de relieve que, por el pronunciamiento cuestionado se consignaron los datos personales del imputado F.B., se detallaron los hechos que se le atribuyen al nombrado, se señalaron los elementos probatorios que sustentaron la decisión, se expresaron los motivos por los que se adoptó el temperamento impugnado y se indicó la calificación legal “*prima facie*” atribuible a los hechos, con cita de las disposiciones legales que se estimaron aplicables; por lo tanto, corresponde establecer que en este caso se observaron las previsiones del art. 308 del C.P.P.N..

7º) Que, las diferencias de criterio que tengan las partes con relación a la fuerza o al alcance probatorio de los elementos incorporados a la causa y a la idoneidad de éstos para generar la convicción suficiente que se exige para el dictado de un auto de procesamiento (confr. art. 306 del C.P.P.N) son materia de la discusión central del trámite del recurso de apelación, pero no implican la invalidez de la resolución recurrida, en los casos en los cuales -como el que se presenta en el “*sub lite*”- por el auto impugnado se cumple con los requisitos de motivación que se prescriben por la ley procesal vigente (confr. Regs. Nos. 923/03, 602/15, 72/16 y CPE 1132/2019/5/CA3, res. del 2/09/19, Reg. Interno N° 621/19, entre muchos otros, de la Sala “B” de esta Cámara y CPE 385/2019/2/CA2, res. del 23/12/19, Reg. Interno N° 854/19 de esta Sala “A”).

En consecuencia, se advierte que la arbitrariedad de la resolución recurrida, invocada por la defensa de F.B., sólo constituye una discrepancia con los criterios vinculados con la cuestión de fondo debatida en los autos principales y con las conclusiones a las cuales se arribó por la



resolución apelada, sin que por aquella circunstancia se encuentre mérito suficiente para declarar la invalidez del auto de procesamiento examinado.

8º) Que, por otra parte, por el recurso de apelación interpuesto por F.B. junto con su defensa, se refirió que el nombrado fue “...*investigado por lavado de activos en el fuero Criminal y Correccional Federal hasta que esa calificación legal fuera descartada dando paso a una nueva por evasión tributaria. Luego de ello, V.S. ha regresado sobre los pasos de la investigación reeditando la imputación descartada y desatendiendo los argumentos que tuvieran en cuenta el Juez y la Cámara Federal al considerar el delito de lavado de activos, especialmente en lo que hace al origen del dinero invertido. Los fundamentos de aquella decisión del fuero vecino fueron expuestos a fs. 406/411, 594/598, y 599/605, razón por la cual de existir un reexamen de la cuestión para avanzar en este proceso, debió ser el juez natural el que realizara esa nueva evaluación...*”.

Lo que se invoca mediante el agravio que surge de la transcripción precedente se trata de una cuestión que ya fue planteada por la defensa de F.B. al solicitar, con fecha 23/5/2022, que el juzgado *a quo* decline su competencia y remita las actuaciones al Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 -que intervenía en la causa antes que la misma se radicara en este fuero en lo penal económico-. Aquella solicitud fue resuelta por el *a quo*, con fecha 27/6/2022, en sentido desfavorable a la pretensión de la defensa del imputado (confr. el Incidente de Incompetencia CPE 2467/2016/2).

La decisión del *a quo* referida fue confirmada por esta Sala “A” mediante la resolución dictada por el Dr. Roberto E. HORNOS, en el Incidente de Incompetencia mencionado precedentemente (confr. res. del 6/10/2022, Reg. Interno 477/2022 de esta Sala “A”). Por lo tanto, el agravio referido no puede tener receptación y, por coincidir con la cuestión que fue tratada y resuelta por este Tribunal en el legajo incidental mencionado, debe estarse a lo establecido por aquél.

9º) Que, con relación a la cuestión de fondo traída a conocimiento de esta Sala corresponde señalar que, contrariamente a lo manifestado por la defensa de F.B., se advierte que los elementos de prueba incorporados a la presente causa, constituyen un cuadro probatorio idóneo y suficiente, con el alcance exigido por el art. 306 del C.P.P.N., para arribar a la estimación que se efectuó por la resolución apelada, relativa a la





## Poder Judicial de la Nación

acreditación de la materialidad de los hechos atribuidos al nombrado y a la participación “*prima facie*” culpable de B. en aquéllos.

10º) Que, por la apelación interpuesta y por el memorial presentado en la oportunidad establecida por el art. 454 del C.P.P.N., la parte recurrente no cuestionó la existencia de las operaciones de compra y venta de bonos que por la resolución impugnada se le atribuyó haber realizado a F.B. entre los años 2014 y 2015, sino que aquella parte se agravió por considerar que “*el origen de los fondos era lícito*”. Al respecto precisó, “*...la operación vulgarmente llamada contado con liqui no es delito sino simplemente una operación financiera lícita por la que se obtenía un importante rédito en pesos mediante una serie de reinversiones de ese dinero en distintos productos financieros.*”

“*Repasémoslo teniendo en cuenta una premisa: el único fin de todos esos depósitos, extracciones y transferencias en Bancos y Alycs, era la obtención de una renta comprando y vendiendo activos financieros.*”

“*Inicialmente, los fondos que obtuve como dividendos, honorarios y préstamos de la empresa S. S.A. los depositaba en [el] Banco, los transfería la sociedad de bolsa o Alyc, que los acreditaba en mi cuenta comitente, y de ahí eran utilizados para comprar bonos en el Mercado de valores. Después, eran vendidos y se volvían a transferir los fondos primero a las sociedades de bolsa o Alycs, y de ahí a los Bancos nuevamente. Todo esto, porque las Alycs únicamente tomaban fondos por transferencia Bancaria, y pagaban fondos únicamente por transferencia a cuenta Bancaria del mismo titular de la cuenta comitente, por disposición de CNV y del BCRA.*”

“*Cada depósito en Banco tenía un costo... y esto se descontaba automáticamente de mi caja de ahorro. La transferencia del Banco a la Alyc tenía otro costo ... era un porcentaje que variaba entre el 0,5% y el 1%... La transferencia del Banco a la Alyc tenía otro costo entre el 0,2% y el 0,8%... La compra del bono en pesos en la Alyc tenía una comisión del 0,5% más IVA, más el 0,02% de derechos de mercado. Todo eso se descontaba en el boleto de compra. Transcurrido el parking (retención forzada) de 72hs establecido por normativa de la CNV del activo, si había subido lo suficiente para dejar una renta de más del 5%, se vendía, pagando otra comisión del 0,5% a la Alyc.... Una vez acreditado el dinero*





*de la venta, pedía la transferencia hacia mi cuenta Bancaria... Una vez acreditado en el Banco, retiraba los fondos con la renta obtenida y también me cobraban por el retiro...”.*

*“...Es decir que Bancos y Alycs cobraban por hacer esto, implicaba hasta un 4% sobre el total del movimiento. Así que la renta que obtenía tenía que ser del 8% o más para que la operación dejara un mínimo del 4% neto de ganancia.”.*

*“...El dinero ya era legítimo, por lo que no había necesidad de ‘blanquearlo’ o darle apariencia de tal...”.*

*“... Como se explicó en la causa el monto inicial tiene un origen lícito y fueron retiros de la firma S. S.A. que aprobó anticipos a cuenta de honorarios, reparto de dividendos y préstamos personales a los directores (ver actas de asambleas generales extraordinarias de fechas 12/09/13, 08/05/14 y 26/08/14 referenciadas en mi indagatoria y por la justicia federal) haciéndome entrega de las sumas de \$ 6.172.920, \$ 13.622.500 y \$ 17.302.000, respectivamente...”.*

11º) Que, con relación a la entrega presunta a F.B. de los fondos aludidos por el considerando 10º *in fine* que antecede, más allá que la misma pudiere constar en las actas de asamblea de los accionistas de S. S.A., quienes, al momento de aprobación de tales actas, se trataban del propio F.B. y de la pareja del nombrado -J.A.-, y sin perjuicio del concepto que pudiera haberse consignado en respaldo de aquella disposición de parte del capital social en favor de uno de los socios, no hay constancias en la causa que corroboren la efectividad de aquella entrega de fondos.

Por otra parte, de acuerdo a los elementos de prueba colectados, S. S.A. no habría contado con ese capital para poder disponer del mismo, conforme surge del Informe Final de la A.F.I.P. -actual ARCA- que obra agregado fs. 556/565 de la causa principal -confeccionado a los fines de lo previsto por el “*párrafo tercero del artículo 18 de la 24.769*”, a partir de lo requerido a fs. 496-, las acreditaciones bancarias registradas por S. S.A. en los períodos fiscales 2014 y 2015 resultaron significativamente inferiores a los montos que se invoca que aquélla habría entregado a F.B. como pagos a cuenta de dividendos según las actas de asamblea de accionistas antes mencionadas.

Asimismo, si bien las ventas declaradas por S. S.A. resultaron superiores a las acreditaciones bancarias registradas, la A.F.I.P. -actual ARCA- constató una “*escasa relación entre las ventas declaradas y los*







## Poder Judicial de la Nación

*gastos computados [respecto de los períodos 2013, 2014, 2015 y 2016] lo que infiere un índice de rentabilidad prácticamente nulo... ”. En este mismo orden, se advierte que cuando la sociedad de bolsa I.C. con la que operaba B., le solicitó los balances de S. S.A. para examinar la procedencia del dinero con el que aquel operaba, presentó un balance no actual y que no reflejaba las sumas adelantadas supuestamente, ni por su contenido se permitía admitir que la sociedad hubiera tenido rentas o patrimonio suficientes que le permitieran distribuir dividendos por esos importes.*

Por otro lado, del Informe Final de la AFIP -actual ARCA- aludido, tampoco surge que se haya podido constatar la existencia de los mentados adelantos a los socios en concepto de honorarios, de dividendos, o de préstamos, como invoca B. en los ejercicios en cuestión, y de las constancias de la causa no surge que se hayan incorporado otros elementos que den cuenta de la efectiva entrega al imputado por parte de S. S.A., del dinero que aquél refirió haber recibido de la misma, ni de la capacidad económico financiera de la empresa para poder concretar aquella entrega, ni de cuál sería la procedencia de aquellos fondos, teniendo en cuenta el índice de rentabilidad prácticamente nulo que la empresa habría tenido desde 2013 y la situación de la misma emergente del último balance presentado.

12º) Que, además de lo expresado precedentemente, cabe recordar que la causa principal a la cual corresponde este legajo de apelación se inició a partir de la denuncia efectuada por la PROCELAC con motivo de los reportes de operaciones sospechosas realizados por los bancos con los que operaba B..

El expediente UIF N° x/2014 tiene origen en un reporte de operación sospechosa (ROS) N° x realizado por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, que el 28/5/2014 informó que F.B., entre el día 2/1/2014 y el 13/5/2014, llevó a cabo operaciones por un monto de U\$S 2.471.529, equivalentes en esa época a \$ 19.750.108. El banco informante refirió: “.... *respecto de la operatoria efectuada en el mercado de capitales se presume que el cliente compra bonos cotizantes en moneda extranjera para hacerse de dólares, para luego vender los billetes en el mercado paralelo y volver a efectuar el mismo circuito. Además se desconoce el origen del monto inicial con el cual empezó a realizar esta operatoria en el mes de enero, si bien el cliente presenta documentación de respaldo de las operaciones realizadas,*



*en función a lo expuesto precedentemente no se puede justificar la operatoria realizada, ello sumado a las inconsistencias observadas en los montos informados en las DDJJ fiscales...”.*

*Asimismo, conforme surge de la causa principal a la cual corresponde este legajo “...Luego de recibir ese reporte, la UIF unificó el tratamiento de otros ROS vinculados a B., a saber:”*

*“ROS N° x: El Banco Columbia reportó como inusual el día 18/7/2012, el depósito a plazo fijo en pesos de \$499.500, realizado por B..”; “ROS N° x: Rava Sociedad de Bolsa reportó el día 20/1/2014 acuerdos fiduciarios en operaciones bursátiles por un monto de \$706.725.”; “ROS N° x: El Banco BBVA Francés reportó, el día 5/3/2014, que [respecto de S. S.A.] durante el periodo comprendido entre los meses de septiembre y diciembre 2013, se registraron créditos en la cuenta corriente por \$1.464.378.”; “ROS N° x: Puente Hnos Sociedad de Bolsa reportó como inusual que ‘el cliente fondeó su cuenta comitente principalmente mediante depósitos de dinero en efectivo en las cuentas bancarias que Puente Hnos Soc. de Bolsa posee en el Banco de Valores S.A. por importes materiales (en conjunto) y en forma fraccionada en el tiempo (entre 6/02/2014 y el 30/06/2014 alcanzaron los \$45.272.000). Asimismo, dichos depósitos en moneda nacional (pesos) fueron realizados, mayoritariamente, con posterioridad a egresos de su cuenta comitente en dólares estadounidenses’. El monto reportado alcanzó los \$45.272.000.”; “ROS N° x: el I.C. Sociedad de Bolsa reportó, el día 12/9/2014, operaciones en cuenta comitente por un monto de \$38.772.000. En la descripción de la maniobra se dijo que ‘Durante los meses de junio, julio y agosto de 2014, el cliente F.B. ha realizado doce depósitos en efectivo, cuyos importes promedian la suma de \$3.000.000 totalizando un monto de \$38.772.000. El cliente deposita en efectivo pesos en el banco ciudad de Buenos aires en la cuenta corriente N° 99925226-5 que I.C. tiene en dicha entidad, para que sean acreditados a su cuenta comitente N° 106182 nuestra sociedad. Con esos pesos, realiza operaciones de compra y venta de bonos girando lo producido a su propia cuenta bancaria en el banco Ciudad, caja de ahorro en dólares N° 601430. Esta operación la reiteró en cada deposito en efectivo que realizó’.”; “ROS x –complementario del ROS N° x-: El Banco Ciudad de Buenos Aires, el 1/10/2014, reportó ‘una persona física que posee una caja de ahorros en pesos y otra en dólares cuyos movimientos no se pueden justificar con la documentación presentada por el cliente’. Agregando que ‘respecto a la operatoria efectuada en el mercado de capitales se presume que el cliente*





## Poder Judicial de la Nación

*compra bonos cotizantes en moneda extranjera para hacerse de dólares, para luego vender los billetes en el mercado paralelo y volver a efectuar el mismo circuito. El cliente fue reportado ante la Unidad de Información Financiera en el mes de mayo de 2014, bajo el número de control 44732773 y se presume que continúa realizando la misma operatoria por lo que se decide ampliar el reporte’.”; “ROS N° x –complementario al ROS x-: Puente Hnos. Sociedad de Bolsa reportó el 17/11/2014 operaciones por un monto de \$3.520.000 y en la descripción sostuvo que ‘el cliente fondeó nuevamente su cuenta comitente el 12/09/2014 mediante dos depósitos en efectivo en la cuenta bancaria que Puente Hnos Sociedad de Bolsa SA posee en BBVA Banco Francés SA por \$2.000.000 y \$1.520.000 respectivamente’.”; “ROS N° x: Rava Sociedad de Bolsa reportó operaciones bursátiles, el día 20/11/2014, por acuerdos fiduciarios por un monto de \$4.309.040.”; “ROS N° x: El BBVA Banco Francés reportó operaciones el día 12/12/2014 por un monto de \$5.452.371 que fueron descritas como ‘se detectó una operatoria significativa, a través de una estructuración de depósitos en efectivo y transferencias recibidas en cajas de ahorro bajo la titularidad del cliente F.B.. Los débitos se realizaron mediante transferencias enviadas a otros bancos, con lo cual mantuvieron escasa permanencia en la entidad... en base a nuestros registros el Sr. B. declara ser gerente con ingresos de \$20 mil. Al no resultar razonable la operatoria con el perfil del cliente, se solicitó documentación respaldatoria en varias oportunidades, pero ninguna ha sido presentada a los efectos.’”.*

*“En total, la UIF recibió 10 reportes de operaciones sospechosas respecto de F.B. por un monto de \$159.018.900 por el periodo que va de 1/12/2011 a 1/12/2014 y luego de procesar la información decidió elevar el expediente administrativo a conocimiento del Ministerio Público Fiscal para que se investiguen las maniobras reportadas (confr. Expediente UIF N° x/2014 caratulado ‘Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ ROS’ reservado por Secretaría)....” (confr. la reseña efectuada por el dictamen fiscal de fecha 7/2/2022, por el cual se solicitó que se convoque a F.B. a prestar la declaración indagatoria y, en el mismo sentido, el considerando 1° de la resolución apelada y el expediente UIF x/2014 que obra digitalizado en el Sistema de Gestión Judicial Lex 100).*

*Cabe destacar que por el ROS N° x, del 12/9/2014, mencionado por la transcripción que antecede, I.C. Sociedad de Bolsa informó: “...DDJJ En el legajo contamos con la DDJJ de Bienes Personales, en donde declara créditos por \$284.985, y Bienes Personales por \$14.249, totalizando un*



*Patrimonio Neto alcanzado por el impuesto de \$299.234, y bienes exentos por \$6.294.428. Luego de recibir más depósitos en efectivo del cliente, solicitamos al cliente que amplíe su documentación de respaldo. Acta de Asamblea Frente a nuestro pedido de ampliar su documentación patrimonial, el cliente nos aporta un Acta de Asamblea Extraordinaria de la empresa S. S.A., de fecha 08/05/2014, certificada por escribano público. En ella se observa que la sociedad le asigna al director F.B. la suma de \$13.622.500 en concepto de 'asignación de sumas a cuenta de dividendos'. Balance Considerando que el respaldo de las operaciones está dado en parte por la Declaración Jurada, y en parte por el Acta de Asamblea de S. S.A., decidimos solicitarle el Balance de S. S.A. para poder corroborar que la empresa efectivamente tuviera fondos suficientes para distribuir como dividendos. Así, nos presenta un Balance con cierre al 31/03/2012, que además de antiguo no refleja las sumas repartidas a B.. **Hasta el día de la fecha no hemos recibido el último Balance contable exigible, que demuestre que la sociedad tiene suficientes ganancias para distribuir los dividendos a su accionista Sr. B...**" (confr. fs. 20 y siguientes del cuerpo 1, UIF x/2014 -el resaltado corresponde a la presente-).*

13º) Que, si bien la parte recurrente alega la procedencia lícita de los fondos invertidos inicialmente por F.B. en la operatoria que se cuestiona, esa afirmación no se compadece con las pruebas incorporadas a la causa, reseñadas por las consideraciones precedentes, a partir de cuyo contenido aquella invocación no se ve corroborada sino que, por el contrario, quedaría descartada, dada la incapacidad financiera de S. S.A..

En efecto, por el recurso de apelación interpuesto contra la resolución recurrida, el imputado y su defensa se limitaron a insistir con la procedencia lícita del dinero utilizado para realizar las operaciones bursátiles, invocando que S. le había entregado a B. los fondos a los que se hizo referencia por el considerando 10º *in fine* de la presente, pero no pudieron dar razón de cómo pudo realizarse aquella transferencia, ante la incapacidad de S. S.A. para darle las mentadas sumas al nombrado (confr. considerando 11º también de la presente). A lo informado por la ARCA (ex AFIP), se agrega que, en los casos en que F.B. aportó documentación de respaldo a la entidad bancaria o bursátil que se la solicitó (confr. la transcripción efectuada por el considerando anterior), por la misma no se justificó la actividad realizada por parte del nombrado, y en otros aquél no aportó los elementos que se le requirieran. Asimismo, es de destacar que en





## Poder Judicial de la Nación

algunos de los reportes de operaciones sospechosas se hizo referencia a que previo a la compra de los bonos, se verificaron depósitos en efectivo por sumas millonarias -lo que habría sido tenido en cuenta para emitir los reportes de operaciones sospechosas-. Por otra parte, no se han incorporado en esta causa elementos o informaciones que den cuenta de otra procedencia lícita del dinero, o que permitan ponderar la pertinencia o la utilidad de la producción de alguna diligencia con el fin de corroborarla.

14º) Que, por lo expresado por los considerandos 11º a 13º se permite concluir, por un lado, que el dinero con el que F.B. inició la operatoria es de una procedencia incierta, cuyo origen aquél fue intimado a acreditar por las entidades bancarias y bursátiles en virtud de la reglamentación vinculada con la ley 25246, con resultado negativo. Ello, como se dijo, ya que la procedencia del dinero que B. indicó, como dispuesto por S. S.A. no habría sido pasible de tenerlo dada la incapacidad económico-financiera real de aquella entidad, sin perjuicio de lo que se documentara por las Actas de Asamblea aludidas por el considerando 10º *in fine* de la presente. Por otra parte descartada con los alcances de la presente etapa procesal la explicación ensayada en torno del origen lícito de los fondos con los cuales habría llevado a cabo la operatoria bancaria y bursátil entre los años 2014 y 2015, la conclusión del juzgado *a quo* en torno a que aquéllos habrían tenido una procedencia espuria se presenta razonable actualmente.

Luego, no debe soslayarse que el circuito del dinero aludido con posterioridad a su conversión a dólares mediante la modalidad de compra de títulos, habría sido llevado a cabo por F.B. en efectivo, aún tratándose de cantidades significativas de dinero que depositaba en los bancos con que operaba (confr. el considerando 12º de la presente), no habiendo podido determinar el Banco Central que las posteriores ventas de esos dólares, hayan quedado registradas en el Mercado Único Libre de cambios, circunstancia que en el contexto descripto se constituye como un dato más en torno de la operatoria marginal practicada.

15º) Que, por los agravios invocados por F.B. y por su defensa, no se logra controvertir lo establecido por la resolución apelada en cuanto a que, a los fines de concretar la reinversión reiterada de los fondos



cuestionados en el mercado bursátil, aquél se habría valido de la venta de los dólares que retiraba luego de liquidar los bonos adquiridos, en el mercado paralelo.

B. y su defensa sostienen, con relación a las ventas en el mercado marginal de los dólares billetes obtenidos por el nombrado, que en la causa no obra prueba que dé cuenta de aquellas ventas supuestas. Sin embargo, no puede pasarse por alto que según la explicación de F.B., aquél *“...invertía en pesos y retiraba los dólares; los mismos se cambiaban nuevamente por pesos. Tal es el origen de los depósitos en pesos efectuados, que surgen de las diferencias obtenidas por posterior venta de dólares a pesos y luego la nueva colocación de los pesos en la entidad bancaria...”* (confr. el escrito adjunto con el memorial presentado ante esta instancia, titulado: *“INTERPONE RECURSO DE APELACIÓN. Excmo. Tribunal Fiscal de la Nación”* -el resaltado es de la presente-). Sin embargo no se ha podido corroborar en la causa que B. vendiera los dólares que obtenía por la venta de los bonos, en el mercado único libre de cambios, forma autorizada para operar en ese ámbito.

En efecto, la hipótesis inicial en ese orden, no ha quedado despejada, toda vez que B. manifestó que pagaba los bonos con el producto de la venta de otros bonos vendidos anteriormente; toda vez que esa venta de bonos le reportaba dólares, y luego se verificó que él depositaba pesos para seguir operando, al no haber constancias de la venta de aquellos dólares en una entidad habilitada, solo cabe admitir la conclusión señalada por la fiscalía en cuanto sostiene que el encartado habría acudido al mercado marginal para obtener pesos a cambio de los dólares, lo cual, no se puede descartar que podría constituir, en principio, una conducta alcanzada por el Régimen Penal Cambiario. (confr. asimismo, el informe elaborado por el Área Técnica de la PROCELAC, también valorado por la resolución recurrida -confr. el considerando 2º de la presente- del cual surge desarrollo de la operatoria en cambios y su correlación con la operatoria bursátil cuestionada).

16º) Que, con respecto al delito previsto por el art. 303, inc. 1º, del Código Penal (según texto de la ley 26.683, vigente al momento del hecho), que sanciona a *“...el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los*







## Poder Judicial de la Nación

*subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito...*”, por la doctrina se ha expresado: “...lo prohibido en nuestra formulación legal es la realización de una maniobra ‘cosmética’ que permita, como consecuencia posible, que el autor pueda mostrar a la sociedad que obtuvo su dinero ejerciendo una actividad lícita, cuando en verdad esto no fue así. Esa apariencia de legalidad es lo que se pretende evitar, y que el tipo penal diga que basta con que ésa haya sido la ‘consecuencia posible’ de la acción ‘da al intérprete la idea, a nivel de tipo objetivo, de que si la maniobra de lavado es descubierta, de todos modos el fracaso objetivo del maquillaje no impide sancionar siempre que la maniobra haya tenido una dosis de idoneidad’...” (confr. CÓRDOBA, Fernando J., “Delito de lavado de dinero”, 1ra. edición, 3ra. reimpresión, Buenos Aires, Ed. Hammurabi, 2017, pág. 87, con cita de TROVATO, Gustavo Fabián, “La conducta prohibida en el delito de blanqueo de capitales y la imputación penal de las personas jurídicas por lavado”, publicado en Revista de Derecho Penal y Procesal Penal N° 10/2014, págs. 2116/2118, y CPE 898/2020/24/CA6, res. del 14/07/2021, Reg. Interno N° 456/21, de la Sala “B” de esta Cámara).

Asimismo, con respecto al hecho precedente, se ha expresado que “...[h]echo antecedente de lavado de dinero sólo puede ser un delito. Pero no hace falta que el hecho anterior del cual provienen los bienes haya sido un hecho culpable y punible, sino que basta que haya sido típico y antijurídico, es decir, un hecho ilícito...es el origen ilícito de los bienes lo que convierte en reprochable su adquisición o recepción; no la culpabilidad y punibilidad del autor del ilícito previo...para que no quedara ninguna duda al respecto la ley 26.683 [B.O. 21/06/11] reemplazó la expresión ‘delito’ por la de ‘ilícito penal’ cerrando así la posibilidad de cualquier interpretación alternativa por la que se pretendiera exigir algo más que la tipicidad y la antijuricidad del hecho precedente...”. Es decir, “...[l]a condena por lavado requiere la prueba de la existencia de un hecho ilícito del cual provienen los bienes. Pero hay que recordar que ese hecho no es el objeto del proceso, de modo que su existencia no precisa ser probada con precisión y el detalle que sí sería necesario si fuese el objeto del juzgamiento...” (confr., CÓRDOBA, Fernando J., ob. cit., págs. 135, 137 y 148).

En el mismo sentido, este Tribunal ha expresado: “...[respecto del] agravio [...] vinculado con la necesidad de la existencia de una sentencia condenatoria por el delito precedente al lavado de activos, corresponde expresar que no es necesario que en la presente causa, que





*tiene por objeto la investigación y la acreditación de supuestas responsabilidades penales por hechos presuntos de lavado de dinero de origen delictivo, se investiguen el o los delitos previos de los cuales provendría aquel dinero, ... ‘...se requiere...la comprobación de una actividad delictiva previa de modo genérico, que permita la exclusión de otros orígenes posibles, no siendo necesaria la superación del plano indiciario, ya que, la demostración plena de esos vínculos nos conduciría a la valoración de la conducta del antecedente...(confr. Sala I, C.F.C.P., ‘Orentrajch, Pedro y otro s/ recurso de casación...’, rta. el 21/3/2006)...’ (confr. CPE 911/2013/2/CA1, res. del 22/9/2015, Reg. Interno N° 428/15, de esta Sala ‘B’)...’ (confr. CPE 612/2014/18/CA1, res. del 17/09/19, Reg. Interno N° 697/19, de esta Sala ‘B’)...” (confr. CPE 1362/2017/14/CA1, res. del 03/11/2021, Reg. Interno N° 697/21 de la Sala “B” de esta Cámara).*

Con relación a la conexión entre los bienes objeto del lavado y las actividades ilícitas, se ha sostenido además que “...para poder afirmar que un bien proviene de un delito, es preciso que exista entre ambos una relación de causalidad... el delito debe haber sido la causa ... de que el bien se halle en el patrimonio de la persona que lo tiene...” (confr., CÓRDOBA, Fernando J., ob. cit., págs. 156/157).

17º) Que, los cuestionamientos que F.B. y su defensa efectuaron respecto a la falta de pruebas de actividad ilícita precedente al lavado de activos imputado, parten de un análisis sesgado respecto a la entidad convictiva de los elementos de prueba e información incorporados actualmente a la causa.

En efecto, como ha establecido este Tribunal en casos anteriores, “...aquel análisis parcial no puede tener una recepción favorable, pues la eficacia de las presunciones que podrían derivar de cada elemento de prueba depende de la valoración conjunta que se efectúa de aquellos teniendo en cuenta la diversidad, la correlación y la concordancia de los mismos, pero no de un tratamiento particular y aislado pues, por su misma naturaleza, cada uno de los indicios no puede llegar a fundar aisladamente ningún juicio convictivo, el cual deriva de la pluralidad y de la concordancia de estos (confr. Fallos 300:928)...” (confr., entre muchos otros, Regs. Nos. 43/11, 490/11 y 718/12, como también CPE 387/2010/2/CA1, res. del 24/10/14, Reg. Interno N° 464/14; CPE 1538/2010/4/CA1, res. del 10/03/15, Reg. Interno N° 58/15; CPE 12005804/2009/2/CA1, res. del 17/07/15, Reg. Interno N° 310/15, CPE





## Poder Judicial de la Nación

1274/2013/6/3/CA3, res. del 18/09/15, Reg. Interno N° 419/15 y CPE 354/2014/2/CA1, res. del 01/07/16, Reg. Interno N° 312/16, de la Sala “B”, CPE 1561/2018/67/105/CA55, res. del 08/10/19, Reg. Interno N° 684/19 y CPE 1913/2019/5/CA1, res. del 18/02/20, Reg. Interno N° 46/20 de esta Sala “A” de este Tribunal).

En este sentido, *“...la totalidad de los elementos probatorios arrimados al expediente debe ser objeto de una valoración articulada, contextual y conjunta dentro del plexo probatorio, el cual, evaluado en un acto único y con ajuste a la sana crítica racional, posibilita la obtención de una acabada constatación de los hechos investigados. El mero análisis parcializado de los elementos de prueba incorporados al proceso, impide la comprensión global del hecho de que se trata”* (confr., entre otros, Regs. Nos. 879/03, 785/10, 360/13 y CPE 278/2013/4/CA2, res. del 31/10/2016, Reg. Interno N° 624/16 y CPE 1950/2014/116/CA8, res. del 17/2/2023, Reg. Interno N° 35/2023 de la Sala “B”, así como también CPE 1561/2018/67/105/CA55, res. del 08/10/19, Reg. Interno N° 684/19 y CPE 1913/2019/5/CA1, res. del 18/02/20, Reg. Interno N° 46/20 de la Sala “A”, ambas de esta Cámara).

18º) Que, es de destacar que F.B. y su defensa se agravieron, además, por considerar que el monto total en pesos que se le atribuye haber puesto en circulación, se trata de una suma *“que no es otra que la repetición de diversas inversiones repetidas del mismo monto inicial”* y *“no de un único monto... No se trata de una simple cuenta de almacén como se ha propuesto, sino de un serio análisis de operaciones financieras mediante la intervención del Cuerpo de Peritos Contadores y expertos contables de parte...”*. Al respecto, cabe recordar en primer lugar, que por la resolución apelada se estableció *“...con relación a la pericia contable solicitada, toda vez que el monto concreto ya se encuentra determinado en autos conforme la imputación efectuada al momento de recibírsele declaración indagatoria a B., aportada que sea la documentación necesaria y una vez aclarado el objeto concreto para la realización de una pericia contable, se proveerá...”*.

Con relación a aquello, se advierte que la defensa del imputado no ha aportado hasta el momento elementos que determinen la necesidad y pertinencia de realizar la pericia contable solicitada, por lo que en el actual estado probatorio, es razonable estar al respecto a lo que se estableció por el juzgado *a quo* con cita del informe del Área Técnica de la PROCELAC, aportado en la causa con fecha 7/12/2021, con respecto al monto



de \$ 183.362.886,65 introducido por B. en el circuito financiero durante los años 2014 y 2015.

19º) Que, ello, sin dejar de recordar que sin perjuicio de la necesidad eventual de producir alguna prueba, y por los resultados que aquella pudiera traer aparejada en el futuro, no pueden soslayarse las conclusiones expresadas por los considerandos anteriores -que se basan en las constancias que actualmente se encuentran incorporadas a la encuesta-, ni se impide adoptar el temperamento que se establece por el art. 306 del ordenamiento adjetivo, pues por aquel ordenamiento se prevé el carácter provisorio, revocable y reformable del auto de procesamiento (art. 311 del C.P.P.N.), precisamente para que el juez pueda ponderar aquellas circunstancias futuras en el supuesto en que se produjesen (confr. Regs. N° 1036/05, 132/08, 7/11, 379/11, 703/11, 762/11, 161/12, 237/15 y 167/16, entre muchos otros, de la Sala “B”).

En este sentido, este Tribunal ha establecido: “...para el dictado del auto de procesamiento se requieren elementos de prueba por los cuales, al menos, se permita corroborar la existencia de un estado de probabilidad con respecto a la comisión del delito investigado, y a la participación culpable de los indagados por aquel hecho...” (confr. Regs. Nos. 606/10 y 237/15, entre otros, de la Sala “B”).

20º) Que, por todo lo expresado, el análisis de los elementos probatorios incorporados a la investigación, ponderados en conjunto y de conformidad con las reglas de la sana crítica, permiten en este estado del proceso, con el grado de certeza que se exige para el dictado de un pronunciamiento como el recurrido, descartar el argumento introducido por la defensa en cuanto a que aquél resulta prematuro (confr. considerando 4º primer párrafo, de la presente), por lo que el agravio introducido por aquélla en tal sentido, tampoco puede tener recepción favorable.

21º) Que, por lo establecido por las consideraciones que anteceden, corresponde concluir que el auto de procesamiento, dictado respecto de F.B., resulta ajustado a derecho y a las constancias incorporadas actualmente al expediente.

22º) Que, con relación al monto de embargo que se dispuso por el punto II de la resolución apelada, respecto de F.B., corresponde expresar





## Poder Judicial de la Nación

que por el considerando 12° de la resolución recurrida el juzgado “*a quo*” expresó los motivos en función de los cuales estableció el monto del embargo que dispuso, y la parte recurrente no logró demostrar la improcedencia concreta de la medida cautelar dispuesta por el monto en cuestión, ni el desajuste de aquella de acuerdo con las eventuales y diversas obligaciones previstas por el artículo 518 del C.P.P.N.

Por lo tanto, corresponde confirmar también la resolución recurrida en relación con la orden de trabar embargo sobre los bienes de F.B. por la suma recordada por el considerando 1° de la presente.

Por ello, **SE RESUELVE:**

**I. CONFIRMAR** los puntos dispositivos I y II de la resolución recurrida en cuanto por aquéllos se dispuso el auto de procesamiento, sin prisión preventiva, de F.B., y se dispuso trabar un embargo sobre los bienes de aquél hasta cubrir la suma de \$ 734.000.000.

**II. CON COSTAS** (arts. 530, 531 y ccs. del C.P.P.N.).

Regístrese, notifíquese y oportunamente comuníquese de conformidad con lo dispuesto por la resolución N° 96/2013 de Superintendencia de esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico y devuélvase este legajo al juzgado *a quo*.

Firman los suscriptos, atento la actual integración de esta Sala (confr. Res. N° 13/2023 de Superintendencia de esta Cámara).

ROBERTO ENRIQUE HORNOS  
JUEZ DE CAMARA

CAROLINA L.I. ROBIGLIO  
JUEZ DE CAMARA

ANTE MÍ:

PATRICIA R. MIERES  
SECRETARIA DE CAMARA

